

Capítulo 1: Presas fáciles

«Averiguación previa número 1780/93-05, de fecha 25 de enero de 1993. Se localizó en la colonia Alta Vista el cadáver de una persona de sexo femenino de aproximadamente 16 años de edad, de complexión robusta, de tez blanca, cabello castaño claro, de aproximadamente un metro sesenta y cinco de estatura. [...] Como huellas de violencia se le apreciaron: doble equimosis* en la región del cuello con marcas profundas en la parte lateral derecha del mismo, apreciando en esta región un cable de conexión eléctrica con dos vueltas y anudado. [...] Causa de la muerte: asfixia por estrangulación. Dicho cadáver fue identificado con el nombre de Angélica Luna Villalobos, quien contaba con seis meses de embarazo.»¹

He aquí cómo, en unas cuantas líneas, las autoridades presentaban el deceso de la que sería una de las primeras «muertas de Juárez». Cuarenta y ocho horas antes, otra joven, Alma Chavira Farel, había corrido la misma suerte: había sufrido abusos sexuales antes de ser estrangulada. Pero no hay rastro de este caso en los archivos de los investigadores, ningún expediente. A partir del descubrimiento de esos dos cuerpos, en enero de 1993, los informes de autopsias seguirían uno tras otro, en cadena. Varios centenares de niñas y de jovencitas serían encontradas asesinadas, un promedio de dos al mes. Muchas de ellas fueron violadas, secuestradas y torturadas con una violencia rara vez igualada. Incluso después de varios

33

* Cardenal, moretón, magulladura. (*N. del T.*)

meses de los hechos, los cadáveres encontrados testimoniaban la saña de los asesinos.

«Averiguación previa número 08520/94-503, de fecha 8 de mayo de 1994. A trescientos metros de la autopista Juárez Porvenir, a la altura de la estación de radio XROK, denominada Radio Cañón, se localizó el cadáver de una persona del sexo femenino en una posición decúbito ventral, con los brazos extendidos en forma de cruz y las extremidades inferiores separadas en forma de “V”, de una edad aproximada de 10 años, cabello negro, nariz chica, boca chica y labios delgados, dicho cadáver viste calcetas negras y zapatos tipo tenis color blanco, su blusa levantada hasta el cuello. [...] Presenta las siguientes huellas de violencia: equimosis en región anterior de cuello. [...] Luego de realizar la autopsia se estableció que la causa de la muerte fue asfixia por estrangulación. [...] En la región vaginal se localizó un cabello color blanco tipo cana. Posteriormente fue identificada con el nombre de Gladys Janeth Fierro Vargas, la cual desapareció el día 6 de mayo del mismo año [1994].»

«Averiguación previa número 05396/96-1102, de fecha 7 de abril de 1996. Víctimas: Rosario García Leal, Guadalupe Verónica Castro Pando, Olga Alicia Carrillo Pérez. Al sur del sector denominado Lomas de Poleo, al nivel del lugar llamado Ejido López Mateos, se localizó el cadáver de una persona del sexo femenino, el cual carece de cráneo y extremidades superiores. Como a sesenta metros al norponiente se encontró un maxilar inferior con sus piezas dentales completas, una clavícula completa con restos de piel acartonada. [...] A tres metros, un brasier color negro, de talla chica con ambos tirantes rotos, un zapato de piel semienterrado color negro, un pantalón color café, un suéter color azul con guinda con la letra R, una bata de maquiladora con el logotipo de Philips en el lado izquierdo. [...] Al practicarse las autopsias, se estableció que en su mayoría las víctimas habían sido violadas y victimadas infiriéndoles lesiones cortopenetrantes o bien estranguladas.»

«Jamás regresó»

Las «muertas de Juárez», como la mayoría de la población de Ciudad Juárez (1,5 millones de habitantes), vivían en una colonia o barrio periférico, a menudo colindando con el desierto. Eran estudiantes, camareras, empleadas domésticas, vendedoras, obreras de alguna maquiladora. Más de doscientas fábricas de este tipo se encuentran distribuidas en diecisiete parques industriales, denominación pomposa tratándose de zonas de arquitectura triste. Construcciones a manera de galerones o hangares, rodeadas de cercas, se alinean a lo largo de centenares de metros, separadas por terrenos llenos de contenedores y de estacionamientos donde aguardan inmensos remolques de camión. Todas estas grandes empresas de electrodomésticos o de electrónica de consumo operan aquí bajo su propia marca o la de algún subcontratista local. La maquila o maquiladora es el mayor empleador de la región: 245.000 personas son sus asalariadas, según la Asociación de Maquiladoras (AMAC), que es el sindicato patronal. Una gran parte de los juarenses viven del trabajo de esta industria, actividad que está sometida a los vaivenes del mercado mundial. Si la crisis golpea a Estados Unidos o a Europa, las maquiladoras despiden personal; si la actividad se recupera, pequeños anuncios pegados a los postes de la electricidad o inmensas pancartas ofrecen «trabajo inmediato».

En las colonias, la vida cotidiana no es fácil. Cuando sopla el viento levanta un polvo amarillo que llega a oscurecer el cielo y se introduce en las pequeñas casas de ladrillo hueco, que en algunos casos no parecen terminadas. En la parte superior de cada castillo de esas viviendas sobresalen las varillas, oxidadas, en espera de que se construya un hipotético segundo piso. Más lejos, los recién llegados se contentan con un ensamblaje de maderas reutilizadas y tela alquitranada. En uno de estos barrios, de nombre Anapra, vive Juana Rodríguez Bermúdez. Sentada bajo un árbol, cerca de una casita sin piso, de paredes blancas y techo de chapa ondulada, abre un gran portafolio negro donde se encuentran dispuestas cuidadosamente en fundas

de plástico varias fotos de una niña y recortes de periódico ya amarillentos. «Mandé a mi hija a comprar un refresco a la tiendita que está al lado de la casa. Era el 10 de febrero de 2003. Jamás regresó», cuenta con una voz apenas audible. Brenda Berenice tenía cinco años. Su cuerpo fue encontrado el 20 de febrero de 2003 en pleno centro de la ciudad, cerca del antiguo edificio de las aduanas, al lado de las vías del ferrocarril. Había sido violada y apuñalada. Una de las más jóvenes «muertas de Juárez».

«Las autoridades no han investigado mucho —afirma la madre—. Cuando fuimos a denunciar la desaparición, los policías me dijeron que me calmara, que la encontrarían.» Sus otros dos hijos, su marido, así como su hermana, la rodean y la sostienen mientras cuenta su pesadilla. Varios perros están echados a la sombra, en la arena esparcida por el pequeño terreno de este barrio del noroeste de la ciudad, separado de Estados Unidos por una simple cerca de alambre de púas y las vías del tren. Al otro lado, mirando al sur, una inmensa extensión de un amarillo anaranjado: el desierto de Chihuahua. Los niños juegan con un viejo balón desinflado casi por completo, mientras que un camión que transporta agua potable rebasa a toda velocidad al único autobús que pasa por allí, el de la línea 10, que se distingue por los colores rojo y blanco.

La casa de la familia Rodríguez Bermúdez, levantada hace poco, es una de las más alejadas de la entrada de este barrio que no cesa de extenderse. Cuanto más se adentra uno en los confines de Anapra, menos carreteras y calles se ven. El asfalto va dejando lugar, poco a poco, a la terracería, a las piedras y luego a la arena y el polvo. Algunas tiendas están alineadas, una carnicería entre un taller de reparación de bicicletas y un desguazadero de coches. Los retratos de antiguos candidatos al cargo de presidente municipal o de gobernador se borran lentamente de las paredes donde fueron pintados. Indiferente a cuanto la rodea, Juana Rodríguez Bermúdez habla y habla.

«Quienes hicieron esto a mi hija son monstruos. Los polis son igual. No tienen más que una idea en la cabeza: acusar a mi marido, que no se apartó de mí ni tantito el día de la desaparición de Brenda Berenice. Todo esto porque él no es más que su padrastro, porque su verdadero padre no ha vuelto a dar señales de vida.» Con el cigarro en la boca, su marido confirma lo que ella dice y se levanta la camiseta para mostrar las heridas. «Me detuvieron tres veces. Cada vez me golpearon para que dijera que fui yo quien la mató. La última vez que me llevaron, un agente de la policía judicial del estado me rompió las costillas. Me decía: “¡Confiesa! ¡Todavía podemos ayudarte a que te den veinte años en vez de cuarenta!”»

Doscientas mil familias en zonas de alto riesgo

Los jardincillos junto a las viviendas no encierran sino una escasa vegetación, a menudo dos o tres árboles famélicos rodeados de algunos manchones de hierba quemada. Más arriba, una pequeña iglesia azul domina las casas, aportando un toque de color que rompe el amarillo uniforme del desierto. A falta de asfalto y de cunetas, las tormentas convierten los baches de las calles en lagunas. Barrios enteros no

tienen acceso al agua potable ni a la electricidad, por no hablar de la red de desagüe. Desde luego, camiones cisterna atienden a quienes no están conectados a la red de distribución del agua, pero hay que pagar para llenar uno o más bidones, que es preciso llevar enseguida a la casa.

En período electoral, envían máquinas para realizar ciertas faenas, más simbólicas que eficaces. Este interés repentino suscita los sarcasmos de los habitantes que, quizá al cabo de varios años de lucha, acaban obteniendo, de todas formas, la conexión a las diferentes redes. En ciertos casos no titubean en anticiparse y entonces se conectan clandestinamente a la red eléctrica. Luchan también contra los propietarios de las parcelas que ocupan, a menudo ilegalmente. Aquí, incluso el desierto pertenece a grandes dinastías que controlan sectores enteros de la economía de Ciudad Juárez. Más de doscientas mil familias viven en zonas consideradas, incluso por las autoridades, como de «alto riesgo» y adonde ni siquiera la policía se aventura a adentrarse al caer la noche.³

En este escenario, desde el mes de enero de 1993, varios centenares de asesinatos han quedado sin explicación; una historia que se repite sin fin: una joven se volatiliza al salir del trabajo, no regresa después de salir a comprar la comida del día o va a bailar a alguna discoteca, y nunca más vuelve a saberse de ella. Así, el 7 de julio de 1995, Silvia Rivera Morales, estudiante de secundaria de diecisiete años, que trabajaba también como dependienta de una zapatería del centro de la ciudad, desapareció. El 9 de septiembre fue hallada muerta. Había sido violada y torturada. La autopsia reveló que su o sus asesinos le habían arrancado el seno izquierdo y el pezón derecho. Eréndira Buendía Muñoz pasó su última noche bailando en un salón de baile no lejos de uno de los puentes internacionales que unen México con Estados Unidos. Al cabo de tres días, el 19 de noviembre de 1997, su cuerpo reapareció en un terreno baldío cercano a una maquiladora. Había sido violada y estrangulada.

Celia Guadalupe Gómez de la Cruz era una colegiala de trece años, sin problemas. Un mes exacto después de su desaparición el 10 de diciembre de 1998, su cadáver fue descubierto medio enterrado en un predio baldío muy cerca de una concurrida calle. Había recibido varias cuchilladas en el pecho y había sido violada y estrangulada.

Irma Angélica Rosales Lozano tenía también trece años y asistía normalmente a sus clases en un colegio del sur de la ciudad. El 17 de febrero de 1999 un niño que jugaba cerca de una fábrica encontró su cuerpo, con el rostro cubierto por una bolsa de plástico y vestida, pero con el pantalón bajado. Muerta desde hacía menos de seis horas, Irma fue violada antes de ser asfixiada. Amparo Guzmán Caixba, de quince años, oriunda del estado de Veracruz, soñaba con atravesar la frontera para instalarse en Estados Unidos. Tras llegar a Ciudad Juárez en enero de 2000, comprendió enseguida que el paso de la línea que separa ambos países resultaba más difícil de lo que había previsto. Por fin decidió quedarse y comenzó a trabajar en una maquiladora. Todos los viernes, su día de descanso, se reunía con sus

nuevas amigas en la plaza de Armas del centro de la ciudad. Pero el 12 de abril de 2000 ya no llegó a la cita. Fue encontrada desnuda sobre la ladera de una colina que se levanta junto a la ciudad. Después de violarla, el o los asesinos la estrangularon y abandonaron cerca de un lugar donde al menos otras cinco mujeres han sido encontradas muertas en las mismas condiciones.

El 13 de mayo de 2001 se llamó a los bomberos para apagar el fuego en un basurero en una de las numerosas colonias de Ciudad Juárez. Cuando llegaron al lugar del siniestro, descubrieron el cuerpo de Irma Rebeca Fuentes, de dieciocho años, que yacía junto al foco del incendio. Había sido estrangulada y, a pesar de las muestras de violencia en la entrepierna, los investigadores no consiguieron saber si fue violada. Mercedes Ramírez Morales trabajaba en la maquiladora Admeco y ella sola educaba a dos niños de trece y ocho años. Su cadáver fue descubierto el 25 de enero de 2002: violada, verosímelmente murió a causa de los numerosos golpes de piedra que había recibido en el rostro.

Juana Sandoval Reyna quería ser peluquera de señoras. Jamás llegó a abrir su salón de belleza: su cuerpo fue encontrado en la colonia Anapra, junto con los de otras dos adolescentes, el 26 de febrero de 2003, al cabo de seis meses de su desaparición. El 26 de junio de 2004, a unos centenares de metros de las oficinas de la administración regional, alguien que pasaba por allí descubrió un cadáver semienterrado, con la cara contra el suelo, cerca de un centro comercial.

Alma Brisa Molina Baca, obrera de una maquiladora, había ido a bailar cuarenta y ocho horas antes. Fue violada y estrangulada por un hombre antes incluso de llegar a la discoteca.

Los Mosqueteros escudriñan el desierto

A veces los descubrimientos de cuerpos u osamentas son realizados por asociaciones de radioaficionados que organizan batidas dominicales. A unos sesenta kilómetros de Ciudad Juárez, una de estas agrupaciones se reúne el domingo en el edificio de arquitectura colonial que alberga un pequeño museo. A las seis de la mañana, mientras toman café, esos voluntarios con cazadoras que llevan el logo de los Mosqueteros del Desierto y familias de desaparecidas tratan de calentarse. Los hay de todas las edades. Los adolescentes charlan en la sala de exposiciones ante un vehículo de la época de Pancho Villa; una mujer mayor sujeta la taza de café mientras los mira, y hombres bigotudos, con botas de piel de avestruz, preparan las operaciones o hablan de política. Aquí todo el mundo se conoce y esta reunión dominical es también una ocasión para intercambiar noticias y encontrar un poco de consuelo.

Una vez formado el equipo, las aproximadamente treinta personas que lo componen se dirigen hacia los vehículos. El convoy se pone en marcha bajo la dirección del profesor Humberto Robles y de Franco, los responsables de los Mosqueteros, hacia la zona de investigación. Al cabo de media hora de viaje por una pista que se adentra en el desierto, los coches se detienen. Franco reúne al grupo para dar instrucciones. Son precisas y hasta marciales: «Buenos días,

vamos a revisar esta zona. Quiero un grupo de cada lado de la pista. Formarán una línea recta, cada uno tiene que ir a unos dos metros de su vecino. Hay que respetar la velocidad del grupo. Si encuentran algo, hagan una señal a los responsables».

Las pesquisas se inician en un paisaje de arena con vegetación baja, compuesta por zarzas de unos veinte centímetros de alto. Para apartar las ramas, la mujer de mayor edad del grupo (de unos setenta años) utiliza un palo de golf. Dos adolescentes forman la vanguardia con un cuarentón. Por momentos los radioaficionados intercambian consignas con sus walkie-talkies para igualar la marcha de la pequeña tropa. Al cabo de dos horas, la lluvia acaba interrumpiendo la búsqueda. En el curso de operaciones de este tipo, los Mosqueteros y una organización similar, los Zorros del Desierto, han descubierto varios cuerpos o conjuntos de huesos pertenecientes a mujeres asesinadas, víctimas a menudo clasificadas como desaparecidas desde hace mucho tiempo.

Las muertas forman parte de la decoración

En las paredes del centro de la ciudad o en los escaparates de las tiendas, aparecen con regularidad anuncios de búsqueda, no lejos de los postes de la energía eléctrica con cruces negras sobre fondo rosa, una por cada muerta: «Desaparecida: Gladys Elena Alor Suárez, 16 años. Mide unos 1,60 m, morena, cabellos largos, delgada, ojos café oscuro. Vestida con pantalón negro con tiras blancas en un lado, chamarra beige con un águila en el pecho con la palabra Army, tenis negros. Desaparecida el 3 de septiembre de 2004 en la colonia Tierra Nueva Primera Etapa cuando iba a la escuela. Si tiene informaciones, contacte con este número».

Algunos de esos avisos están redactados en un papel con membrete oficial, como el de la Subprocuraduría de la zona norte del estado de Chihuahua. Otros pequeños avisos, más numerosos, están escritos a mano, mal fotocopiados, y hablan de la esperanza de los padres, amigos o colegas del trabajo. A veces, esos mismos textos son publicados por la prensa local, acompañados de una foto de mala calidad, tomada de algún álbum familiar, reproducción de la identificación de alguna empresa o de un carnet de estudiante. Todos estos pequeños avisos llevan el número de teléfono de algún conocido, de alguna asociación, rara vez el de las autoridades. Las palabras empleadas se parecen y los rostros de las desaparecidas también.

Las «muertas de Juárez» se encuentran presentes por doquier.

Además de las pinturas sobre los postes, numerosas cruces rosas se encuentran distribuidas por ciertos lugares de la ciudad. Delante del puente de Santa Fe, por ejemplo, a doscientos metros de Estados Unidos, un Cristo apoyado en una gran placa rosa, sobre la que centenares de clavos han sido clavados en forma de un crucifijo, les rinde homenaje. Los nombres de todas las víctimas están inscritos, así como una exigencia: «¡Ni una más!». En las avenidas más concurridas, en los caminos que conducen a las colonias más pobres, hasta los parques industriales, también ahí los postes eléctricos llevan los estigmas de estos crímenes. A lo largo de decenas de kilómetros, una

sucesión de inscripciones en rosa y negro clama justicia y recuerda que aquí dos mujeres han sido salvajemente asesinadas cada mes desde hace diez años. Hasta en los rincones más apartados de Ciudad Juárez, los habitantes, madres o padres, han erigido cruces en los lugares donde han sido descubiertos los cuerpos. En Anapra, en una colina que se levanta junto a este barrio situado a las puertas del desierto y a lo largo de la frontera, seis de ellas han sido clavadas en la arena, muy cerca del depósito de agua. Como para recordar que los asesinos continúan golpeando, un aviso de búsqueda ha sido pegado a un poste de la electricidad. Un rostro más de mujer al que acompañan un texto sobre las circunstancias de su desaparición y unos números telefónicos.

El Campo Algodonero, lugar de memoria

Más al sur, encajonado entre dos vías rápidas, frente a la sede de la AMAC, un terreno baldío se ha convertido en un memorial simbólico. Ocho grandes cruces rosas se encuentran plantadas en este lugar, que hace unos años era todavía un campo de algodón. Ocho nombres de jóvenes se hallan inscritos encima por otros tantos cuerpos dejados ahí por los asesinos en una puesta en escena macabra. El 6 de noviembre de 2001, por la mañana, un albañil decidió acortar por los campos para llegar más rápidamente a su trabajo. Descubrió entonces a la primera víctima. Alertadas, las autoridades emprendieron investigaciones por esa zona y cayeron sobre un auténtico cementerio clandestino. «Quienes han hecho esto son enfermos», resume en pocas palabras Óscar Máynez, ex jefe de peritos del estado de Chihuahua y ex encargado del expediente conocido por el nombre de Campo Algodonero. El ex forense todavía sigue de cerca el asunto de las «muertas de Juárez», aunque ya no desempeña funciones oficiales. Dejó su puesto el 1 de enero de 2002. Interrogado por las razones de su dimisión, cuenta su negativa a traficar con informes periciales. Sin ilusiones, confirma no tener pruebas tangibles de esas presiones; luego, desanimado, añade: «Es su palabra contra la mía». Discreto, habla rápidamente de las amenazas de muerte de que ha sido objeto.

Hoy aporta su apoyo a las asociaciones de familias de las víctimas y da clases de psicología y conferencias sobre los derechos humanos en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Sus conclusiones sobre el Campo Algodonero, confirmadas por varios agentes federales, dan escalofríos, incluso si algunos de los cuerpos se encontraban en estado de descomposición avanzado, lo que dificultó su trabajo. Las víctimas no fueron asesinadas en el mismo momento, pero sí de la misma manera. Estaban todas en la misma posición, con el rostro contra el suelo, y tenían indicios de que habían sido maniatadas por las muñecas. A su lado estaban los zapatos. La mayoría de ellas fueron torturadas, violadas y estranguladas. Todas se parecían físicamente y frecuentaban los mismos lugares y las mismas escuelas.

Rasgo común de las víctimas: la pobreza

Para Óscar Máynez, más que los simples retratos robot del aspecto físico —mujeres morenas, jóvenes, cabellos largos, rasgos finos—, existe

también un perfil económico de las víctimas. «Son asesinatos de clase», espeta este diplomado en criminología que ha supervisado decenas de autopsias. «Aquellas de nuestras mujeres que forman parte de la clase social más baja no interesan a las autoridades», confirman las familias. Las palabras que dijo en 1999 el ministro de Justicia del estado de Chihuahua, Arturo González Rascón, legitimaban este sentimiento de abandono y de desinterés: «Existen, desgraciadamente, mujeres que, por sus condiciones de vida y los lugares que frecuentan, se encuentran en peligro. Porque es difícil que alguien que sale a la calle cuando llueve no se moje».4 Traducción: estas mujeres que salen por la noche y seducen a los hombres saben a lo que se exponen... Meses antes, la Dirección General de la policía municipal de Ciudad Juárez había lanzado una gran campaña de prevención, pero la forma en que la llevaron a cabo atrajo las críticas de todas las asociaciones locales. Esther Chávez Cano, que dirige el centro de ayuda a las mujeres maltratadas, Casa Amiga, recuerda: «Cuando vimos y oímos los primeros spots, por tele y radio, quedamos escandalizadas». Los mensajes difundidos eran sorprendentes y hasta incoherentes. Algunos de ellos pedían a las mujeres que llevaran siempre en la mano las llaves de sus coches. Pero ninguna de las víctimas tenía medios para tener un coche, sino que todas ellas tomaban las rutas, los autobuses de transporte público para ir al trabajo o al centro de la ciudad. Otro mensaje les aconsejaba gritar «¡Fuego!» en caso de agresión, para llamar la atención de los transeúntes. Y un tercer spot aconsejaba simplemente: «Si eres víctima de una agresión sexual, esfuérzate por vomitar. Esto provocará de seguro el asco de tu agresor, que entonces huirá».

Como se ha dicho, además de características físicas similares, las víctimas tienen siempre un rasgo en común: la pobreza. Más o menos una cuarta parte de las mujeres jóvenes asesinadas desde 1993 eran empleadas de las maquiladoras. Algunas de ellas, las más jóvenes, trabajaban en ellas para financiar sus estudios. Muchas de ellas desaparecieron cerca de su escuela o institución educativa, siempre en el centro de la ciudad. Una mano de obra barata, de cuatro a cinco dólares por una jornada de nueve horas de trabajo. Pero también blancos fácilmente discernibles por el o los asesinos. El recorrido de sus víctimas es inamovible y está regulado por los horarios de la fábrica: el turno matutino, de seis de la mañana a tres de la tarde; al que sucede el término vespertino, de tres y media a once de la noche; al que le sigue el turno nocturno, de once y media a cinco de la mañana. Las obreras tienen que ir por las calles sin alumbrado público de las colonias. Para llegar al centro de la ciudad necesitan atravesar a pie barrios de mala reputación que dan a la autopista, a veces en mitad de la noche. Vestidas con sus batas de trabajo con el logo de su empresa y el distintivo de ésta en bandolera, toman las rutas, que las llevarán hasta su puesto en la cadena de montaje. Pese a las condiciones de empleo más que precarias, esta situación ha provocado un trastorno en una sociedad machista como es la de México. Hoy, estas mujeres se han emancipado, se ganan la vida, aunque mal; salen por su cuenta y, finalmente,

no tienen necesidad de un hombre en la casa.

Muchos de ellos no aceptan esta situación. El Ministerio Público registra no menos de cuatrocientas denuncias por semana a causa de la violencia doméstica. Pero nada justifica el horror que se cierne sobre Ciudad Juárez.

Una sociedad machista y misógina

Estos hechos tienen un nombre: «feminicidio», concepto teórico que vio la luz en 1976 en Estados Unidos. Se define como: «El asesinato misógino de mujeres por parte de los hombres. Un fenómeno social vinculado al sistema patriarcal en el que las mujeres quedan expuestas a ser muertas, sea porque son mujeres, sea porque no lo son como debieran serlo».⁵

Para la diputada federal Marcela Lagarde, que preside la Comisión Especial Parlamentaria de seguimiento de las investigaciones sobre los asesinatos de Ciudad Juárez, «los asesinos son hombres que piensan tener el derecho de matar a las mujeres porque se imaginan superiores a ellas. Este término se opone al de homicidio».⁶ Esta antropóloga profesional, relacionada con el Partido de la Revolución

Democrática (PRD), izquierdista, precisa también que «no estamos en presencia de un solo tipo de crímenes. Los *modus operandi* son múltiples». Si un centenar de asesinatos se corresponde bien con este esquema (a saber: secuestro, violación, torturas y asfixia por estrangulación), los demás son homicidios por arma de fuego, por arma blanca o por golpes, en su mayoría perpetrados por maridos o parejas, porque la importancia de la violencia doméstica en esta ciudad no es para menospreciarla. «Se han de conjuntar muchos factores para poder hablar de “feminicidio”: condiciones sociales, políticas, económicas y jurídicas particulares de opresión contra las mujeres, que pueden llegar hasta el asesinato», explica Marcela Lagarde.

Una sociedad machista, una actitud misógina que Ana Beatriz tiene presente, sin duda, cuando comienza sus rondas. Miembro de la unidad 724 de la patrulla de mujeres de la policía municipal, recorre las calles durante horas a bordo de su coche patrulla con radio.⁷ «El centro de la ciudad es la zona más peligrosa para las mujeres»,⁸ afirma esta mujer policía de abundante cabellera pelirroja. Con unos bermudas azules y camiseta blanca, Ana Beatriz lleva también chaleco antibalas y, al cinto, su arma de servicio, equipo que la acompaña todos los días en su misión: impedir las agresiones contra las habitantes de la ciudad, atenderlas y, sobre todo, evitar nuevos crímenes.

Con un poco de reticencia, la joven confiesa que, en realidad, ella no escogió ese puesto, que ocupa desde el 17 de marzo de 2003, fecha de la creación oficial de su unidad. «Antes yo pertenecía a una patrulla pedestre. Pero aquí estoy bien. Me gusta lo que hago», dice, como excusándose. Su vehículo blanco, de marca japonesa, sirena tricolor al techo, no pasa desapercibido. Numerosos logos y eslóganes se despliegan en la carrocería: «Porque eres única, cuídate», «Salvemos a Juárez»... Este coche, como los demás de la unidad de mujeres,

no pertenece a la policía municipal de Ciudad Juárez. Le han sido prestados por el Instituto Chihuahuense de la Mujer (Ichimu), donde los recibieron como donación del Partido Verde, formación de línea política fluctuante. «Muchos hombres les faltan el respeto a las mujeres. A veces hay que ponerlos en su lugar», explica.

Una ciudad que nunca duerme

La catedral, construcción de arquitectura colonial, domina con sus dos campanarios los demás edificios del centro. Colocados en su techo, varios altavoces difunden prédicas y música religiosa contemporánea. Del porche desciende una escalera donde se entrecruzan mendigos, fieles y policías municipales de guardia. Dos uniformados dirigen una mirada vacía al atrio situado más abajo, donde hay instalado un mercado artesanal. Los vendedores de artículos de cuero y de souvenirs, con cierta apatía, esperan a los clientes. En la parte superior de un mástil, las novedosísimas cámaras de videovigilancia dominan la escena. Pasado el atrio, la ciudad se tambalea. Menos turística, se ha vuelto populosa con su mercado atravesado por callejas angostas, donde uno se abre paso a codazos. Más lejos, las tiendas dan abiertamente a la calle. Difunden torrentes de música para atraer al cliente. En el interior, los artículos están presentados con la menor aparatosidad posible: el comprador busca un precio, no la calma. Aquí, como todos los días, un coche patrulla avanza lentamente entre los peatones indiferentes, los taxis —verde y blanco— estacionados a lo largo de las aceras y las rutas. Esos viejos autobuses bicolores, masivos, altos sobre sus cuatro patas, avanzan con agresividad en medio de coches sin edad (antiguos Chevrolets o Cadillacs) y de 4 · 4 sin placas y vidrios ahumados, seguros de que están en su derecho. «De aquí parten todos los autobuses a las maquiladoras y hacia los diferentes barrios donde habitan las jóvenes», cuenta Ana Beatriz mostrando un trecho de calle que hay detrás de la catedral. Cada compañía sirve a una o varias colonias y las ciudades perdidas que forman la parte este de Ciudad Juárez. Desde las cinco de la mañana, los alrededores de la catedral se animan. «Por la mañana, las chicas se agrupan aquí para esperar su autobús. Y por las tardes es lo mismo, cuando han concluido su turno», confirma la agente de policía, cuya voz apenas se deja oír por el chirrido de la radio. Si bien desde hace varios meses algunos patrones han puesto en funcionamiento un sistema de rutas que transportan directamente a las chicas desde sus colonias a los parques industriales para que no tengan que hacer el rodeo de ir hasta el centro de la ciudad.

Estas presas fáciles a menudo son secuestradas ahí mismo, a veces en pleno día: sufren agresiones físicas y sexuales que pueden durar varios días antes de que las maten y sus cuerpos sean abandonados en diversos lugares de la ciudad, en terrenos baldíos, cerca de las grandes avenidas o de las vías del tren. Más de la mitad de las víctimas tienen entre trece y veintidós años, según un informe de Amnistía Internacional.⁹ «Ser una adolescente parece un criterio de selección para los asesinos», estima incluso la organización de defensa de los derechos humanos. Las víctimas son chicas, «de las cuales algunas,

a pesar de su joven edad, ya eran madres de familia, pero que querían abrirse paso en la vida. Cierta número de ellas asistían a clases nocturnas y estudiaban los fines de semana o después del trabajo». ¿Cuántas mujeres han sido asesinadas así? Nadie lo sabe. Las autoridades, las madres de las víctimas, las organizaciones locales o internacionales, los periodistas, los sociólogos, los investigadores privados, nadie es capaz de dar un número exacto, y circulan las cifras más extravagantes: doscientas, trescientas, cuatrocientas, quinientas muertas, quizá más. El colmo, según Óscar Máynez, para quien «las estadísticas más precisas que normalmente se deben tener son las de los homicidios, porque se tienen los cuerpos... Las autoridades hablan de unas trescientas muertas, pero esto no satisface a nadie».

Macabra batalla de cifras

Esta situación no hace sino aumentar el horror de este asunto y el dolor de las familias. «Nunca me han gustado las cifras. Mi hija no era un simple número», resume Norma Andrade, cuya hija, Lilia Alejandra, fue encontrada asesinada en febrero de 2001. Por un lado, las autoridades tratan de minimizar el número de muertas; por el otro, algunos no dudan en ampliar la realidad. «Les puedo asegurar que hoy, a la hora en que les estoy hablando, hemos contado trescientos treinta y dos homicidios —declara, con voz calmada y comedida, seguro de sí, Manuel Esparza Navarrete, coordinador muy controvertido de la Fiscalía Especial para la Atención de Homicidios de Mujeres del estado de Chihuahua, encargada de los crímenes contra las mujeres entre 1998 y 2004—. Y de esos trescientos treinta y dos crímenes, sólo noventa son homicidios de carácter sexual.»¹⁰ Cifras confirmadas por Victoria Caraveo, directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer (Ichimu), creado en febrero de 2003 por el gobernador del estado, que aporta apoyo económico y psicológico a ciertas familias de las víctimas. Al unísono, ambos funcionarios regionales claman que sus cifras son las buenas, las únicas válidas, basadas en los expedientes de las investigaciones. Por su parte, Amnistía Internacional y la mayoría de las ONG locales estiman que el número de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez desde 1993 es superior al cómputo de las autoridades. En agosto de 2003, en su informe, Amnistía Internacional hablaba de trescientos setenta casos. Cifra revisada al alza meses más tarde, en marzo de 2004, y fijada en cuatrocientos diez, de los cuales al menos ciento treinta y siete crímenes fueron de carácter sexual. Sobre esos más de cuatrocientos asesinatos, un centenar presenta características comunes. Sin embargo, las macabras estadísticas de Ciudad Juárez no se detienen ahí. Con la mirada perdida a lo lejos, la cabeza inclinada a un lado, revolviendo nerviosamente con la cucharilla la taza de café, Óscar Máynez suspira: «No olvidemos las desaparecidas —suelta de golpe levantando la voz—. Tenemos muchas desapariciones, muchas jóvenes de las que no se tienen noticias. ¿Están vivas? ¿Han sido asesinadas? Sin cuerpo, no hay asesinato; sin asesinato, no hay asesino. Es un problema sin fin». Unas quinientas mujeres han sido clasificadas como desaparecidas, según varias fuentes locales. Pero, aun así, la polémica no cesa. Los funcionarios de la policía

judicial aseguran que han manejado cerca de 4.500 expedientes de desapariciones de mujeres en la ciudad fronteriza desde 1993. Cifra confirmada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). A principios de 2004, la procuradora especial federal encargada de los homicidios de mujeres, María López Urbina, hizo esta declaración sorprendente: «De los 4.581 casos computados, hemos localizado 4.547 mujeres. Sólo quedan 34 casos en trámite».¹¹ Declaración que provocó un estallido de críticas. ¿Cómo tomarla en serio y creer que sólo quedan poco más de treinta expedientes, cuando la CNDH estima que faltan más de 2.400 expedientes de averiguaciones previas sobre desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez? Casi cerca de la mitad de los casos no han sido siquiera seguidos oficialmente por los policías. «Las autoridades han entregado a la CNDH únicamente trescientos informes. Según una investigación minuciosa de esos expedientes, la comisión ha descubierto que, en cuarenta casos al menos, existen semejanzas inquietantes con los informes de las averiguaciones previas de las mujeres asesinadas.»¹² Si parece que una parte de esas desapariciones tiene una explicación creíble —algunas mujeres han regresado a sus lugares de origen, otras se han trasladado y otras han logrado atravesar la frontera—, por el hecho del anonimato que confiere Ciudad Juárez un buen número de casos quedan sin explicación. Y fuertes presunciones pesan sobre la suerte de muchas de esas mujeres, cuyas circunstancias de desaparición o el perfil se corresponden con los de las víctimas. La esperanza de encontrarlas vivas es muy exigua. Ahora bien, la desaparición de una persona, mujer u hombre, no da lugar a una investigación en el estado de Chihuahua. Para iniciar trámites es preciso que los policías encuentren a la persona —viva o muerta— para abrir una investigación por «desaparición forzada» o por asesinato. El código penal estatal no ayuda, pues, ni a las autoridades ni a las familias a encontrar a las desaparecidas.

En su gran despacho del Ichimu, situado a medio camino entre la zona turística de los hoteles y el centro de la ciudad, Victoria Caraveo —Vicky, como la llaman sus colegas y las madres de mujeres asesinadas— nos recibe, toda sonrisas, pero con una charla de quien conoce lo que lleva entre manos. Grande, pelirroja, combatiendo la cincuentena, saca de golpe de uno de sus cajones un voluminoso expediente y anuncia: «Ustedes creen que se encuentran cadáveres de mujeres en cada esquina, ¿no es verdad? Se cuentan muchas cosas de todo esto. Yo les voy a decir qué hay en realidad».¹³ Sigue una larga letanía de cifras y porcentajes, extraídos del informe ordenado y financiado por su instituto y hecho público en noviembre de 2003.¹⁴ «No hay un único modo de operatividad en todos los crímenes; todas las víctimas no trabajan en las maquiladoras. Todo esto es falso y exagerado. De acuerdo con nuestro estudio, realizado por investigadores independientes que han tenido acceso a los expedientes oficiales, sólo el 28 por ciento de los homicidios son crímenes llamados sexuales. La gran mayoría de esos asesinatos tuvieron lugar entre 1995 y 1998, con un promedio de doce a quince víctimas por año.

Entre 1999 y 2003, hemos contado veintinueve casos, o sea, menos de diez por año.» Siempre a tenor de este documento oficial, de noventa mujeres muertas tras haber sido violadas, treinta y tres fueron estranguladas, catorce murieron por heridas de arma blanca, doce a consecuencia de los golpes y, para treinta y una de ellas, las causas de su defunción siguen siendo desconocidas hasta hoy. Para Victoria Caraveo, «la leyenda negra de Ciudad Juárez no ha lugar. No se puede decir que más de trescientas mujeres fueron secuestradas, violadas y muertas: el asunto es más complicado de lo que parece».

Es cierto, pero la polémica acerca del número de muertas vuelve a aflorar con regularidad. Esta batalla de cifras es alimentada, la mayor parte del tiempo, por los propios policías o los políticos de la región. Situación que exaspera a las organizaciones locales y a las familias. «Nuestro único deseo hoy es ver a los asesinos tras las rejas», proclama Maricela Ortiz, cofundadora de la Asociación Nuestras Hijas de Regreso a Casa. «¡Estoy harta! No me voy a pelear por una cifra. Lo único que importa es encontrar a quien mata a todas esas mujeres y poner fin definitivamente a esta masacre», martillea Esther Chávez Cano, que dirige Casa Amiga, el único centro de ayuda para las mujeres maltratadas de Ciudad Juárez.

Pero la tarea se antoja complicada. En el transcurso de los seis primeros meses de 2005, las estadísticas macabras de la ciudad fronteriza explotaron de nuevo; diecinueve chicas fueron asesinadas entre enero y junio. El 14 de marzo, por ejemplo, se descubrió el cuerpo de Coral Arrieta Medina a los tres días de su desaparición, en el barrio de Lote Bravo, situado cerca del aeropuerto y donde se han encontrado varios cadáveres en los últimos años. Su madre se enteró de la noticia en directo, en el plató del Canal 44, cadena de televisión local, adonde ella había ido a lanzar un llamamiento para encontrar testigos. Con lágrimas, trataba de encontrar las palabras, cuando el periodista que la interrogaba fue interrumpido por un reportero. Desde Lote Bravo, éste hizo una descripción precisa de una mujer hallada muerta en ese lugar. En el estudio, de cara a la cámara, la madre de Coral se desvaneció: se trataba de su hija. Las ropas, la apariencia física, todo concordaba. Esta estudiante de diecisiete años fue violada y estrangulada. Otros dos casos traumatizaron igualmente a la población, que se lanzó incluso a la calle para pedir que se hiciera justicia. El 17 de mayo, una niña de diez años, Anahí Orozco Lozano, fue violada, estrangulada y quemada, apenas cuarenta y ocho horas después de que fuera descubierto el cuerpo de Airis Estrella Enríquez Pando, otra pequeña, ésta de siete años. Desaparecida desde el 2 de mayo, fue muerta al menos por dos personas, que la violaron y apuñalaron antes de colarla en cemento.

Ante esta oleada de asesinatos sin precedentes y ante la violencia de los asesinos, la población se hace muchas preguntas, desde hace más de diez años, sin obtener respuesta. ¿Quién mata a las mujeres de Juárez? ¿Qué sentido tienen todas estas desapariciones? ¿Cuáles son los móviles de todos estos asesinatos? ¿Por qué en Ciudad Juárez es tan fácil matar a mujeres con total impunidad?

